

**CONTESTACION 2021009600- MARISEL SOTO Y OTROS****WALTER HERNAN PATIO VELASCO <walter.patino6473@correo.policia.gov.co>**

Lun 29/11/2021 11:31 AM

Para: Juzgado 08 Administrativo - Cauca - Popayan <j08admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>; fernandoyepes@yepesgomezabogados.com <fernandoyepes@yepesgomezabogados.com>; henry-bryon@outloo.es <henry-bryon@outloo.es>; GABRIEL ESCOBAR CORAL <gabriel.escobar1336@correo.policia.gov.co>

 3 archivos adjuntos (817 KB)

CONTESTACION- 2021009600- MARISEL SOTO - ATENTADO TERRORISTA.pdf; PODER.pdf; RESOLUCIÓN 3935 DE 2021.pdf;

Teniendo en cuenta las normas de bioseguridad que adoptó la Rama Judicial con ocasión de la pandemia por COVID 19 y en especial lo relacionado a la distancia física que deben guardar las personas que ingresen a las sedes judiciales y al considerar que la forma como se encuentran dispuestos los puestos de trabajo en las salas de audiencia, no permiten el distanciamiento físico entre los sujetos procesales, mediante aviso a la comunidad publicado el día 25 de junio de 2020, se estableció:

*"... 5. Las peticiones, recursos, solicitud de copias simples y primeras copias, poderes, sustituciones, asignación de citas para atención presencial y demás memoriales, que eleven los usuarios del servicio, se recibirán exclusivamente a través de los correos electrónicos institucionales detallados en el numeral primero."*

...

*"... 8. La atención presencial de los usuarios en la sede de los Juzgados se sujetará, en los términos del párrafo 2 del artículo 3º del Acuerdo CSDJ-11567 de 2020, a la asignación de cita previa solicitada al correo institucional o a la línea telefónica, y se "RESTRINGIRÁ A LO EstrictAMENTE NECESARIO", sin que en ningún caso se puedan recibir memoriales o peticiones."*

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito remitir por medio electrónico la actuación procesal de la referencia, y dada la cantidad de procesos en los cuales es demandada la Policía Nacional en la jurisdicción del Cauca, de manera atenta solicitando se observe lo dispuesto en el artículo 205 del CAPACA, en consecuencia se acuse el recibo del presente memorial, a saber:

*"ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. Además de los casos contemplados en los artículos anteriores, se podrán notificar las providencias a través de medios electrónicos, a quien haya aceptado expresamente este medio de notificación."*

*En este caso, la providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario a la dirección electrónica registrada y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente..."*

Así mismo se dé cumplimiento estricto e inmediato cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4. Del aviso a la comunidad, el cual indica:

*"El estado o trámite de los procesos, para efectos de su consulta virtual, se continuará actualizando en la página web de la Rama Judicial, a través de la plataforma de información SIGLO XXI."*

Lo anterior con el fin de garantizar los principios de publicidad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, contradicción y doble instancia.



Subintendente  
**WALTER PATIÑO VELASCO**  
Teléfonos: 3186249595  
[www.policia.gov.co/](http://www.policia.gov.co/)  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
**POLICÍA NACIONAL**



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.



Honorable Juez  
**ZULDERY RIVERA ANGULO**  
Juzgado Octavo Administrativo del Cauca  
E. S. D.

<b>Radicado</b>	20210009600
<b>Demandante</b>	MARISELA SOTO Y OTROS
<b>Demandado</b>	NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL
<b>Acción</b>	REPARACIÓN DIRECTA
<b>Memorial</b>	CONTESTACIÓN DE DEMANDA

**WALTER HERNAN PATIÑO VELASCO**, Abogado en ejercicio, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 10.756.473 de Piendamó Cauca, con Tarjeta Profesional No. 272.957 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderada especial de la Unidad de Defensa Judicial del Departamento de Policía Cauca, según poder que me fue conferido por el señor Comandante del Departamento de Policía Cauca, encontrándome dentro en término hábil presento **CONTESTACION DE LA DEMANDA**, en los siguientes términos:

**EL DEMANDADO, DOMICILIO Y REPRESENTANTE LEGAL**

La demanda viene dirigida contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, cuyo representante legal es el señor Ministro de Defensa Nacional, con domicilio principal en el C. A. N, en la ciudad de Bogotá D. C, quien ha delegado sus facultades, tanto de notificarse del auto admisorio de la demanda, como de constituir apoderado, en este caso, en el Secretario de la Policía Nacional de Colombia, quien se encuentra representado en el presente proceso por el suscrito apoderado.

**A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS.**

**A LA PRIMERA:** La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, **NO** es administrativa, ni civilmente responsable del daño antijurídico alegado en el escrito de la demanda. En esta etapa del proceso no existen elementos de prueba para determinar que los hechos precitados son reales, o que un posible daño a un bien jurídico tutelado sea imputable a la Policía Nacional.

**A LAS RESTANTES:** No se observa causal para endilgar responsabilidad administrativa a la entidad que represento, por lo tanto, considero **QUE NO PUEDE HABER LUGAR A CONDENA O PAGO DE LOS PERJUICIOS MATERIALES O INMATERIALES.**

**FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

Me opongo al despacho en lo que respecta a las pretensiones consignadas en la demanda, pues no existe responsabilidad por parte de la Policía Nacional en relación con los hechos expuestos por la apoderada de la parte demandante, toda vez que no existe un nexo causal entre la situación fáctica y los daños causados a los demandantes.

**SOBRE LOS HECHOS**

**AL PRIMERO:** No me consta y de llegar hacer cierto debe probarse en el discurrir procesal; puesto que muchos de los ataques perpetrados por los grupos subversivos tienen el carácter de ataques indiscriminados contra la población civil, aún más cuando es un atentado terrorista en municipio de Miranda Cauca, para el día 26 marzo de 2019, fue presentado contra la instalaciones de Alcaldía Municipal Miranda, contra la intenciones de la Policía Nacional de acuerdo a los hechos.



**AL SEGUNDO:** El acto generador del daño no fue causado por miembro alguno de la demandada, sino por grupos terroristas que nada tienen que ver con la Policía Nacional, ni por algún tipo de omisión por parte de estos por cuanto los hechos fueron realizados de manera imprevista por los delincuentes y dirigidos a atacar contra la población civil Alcaldía de Miranda – Cauca, que es materia de investigación por las autoridades y no como quieren endilgarle responsabilidad a la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, pues los hechos resultan imprevisibles y fortuitos, a pesar de la actividad preventiva y disuasiva de la Policía, esto no se puede evitar, y del mismo modo es ilógico pretender responsabilizar a la Policía Nacional por actos ajenos a la Institución, sin tener ningún grado de responsabilidad en este tipo de hechos como buscando culpables sin tener bases o nexos sobre la creación del riesgo.

Por lo anterior mal haría la Nación, en responder por circunstancias que no podría llegar a controlar, más aún cuando la jurisprudencia se ha manifestado en el sentido de que "no puede exigírseles a las autoridades lo imposible, como adoptar medidas de fuera de su alcance en cuanto a recursos económicos se refiere para repeler la acción de mentes desquiciadas y criminales; con las limitantes que tiene la administración en países como el nuestro, no se puede pedir que para cada ciudadano o frente a cada bien que pudiera resultar vulnerado se disponga de un agente policial o vigilancia especial con el objeto de contrarrestar los atentados de la delincuencia organizada, so pena de resultar comprometida la responsabilidad patrimonial de la administración". Dentro de las prioridades del Estado está el bienestar de la comunidad, el cual debe primar sobre el interés particular, no pudiendo en el caso en comento responsabilizar a la demandada por la actividad furtiva y continuada de los delincuentes comunes.

**AL TERCERO:** No es cierto, es una manifestación subjetiva del profesional del derecho sin sustento probatorio, pues no obra prueba que certifique los presuntos enfrentamientos o ataques a la población civil en el municipio de Miranda Cauca, para el día 26/03/2019, se fuera presentado contra la instalaciones policiales de la cuales está retirado del lugar de los hechos a la estación Policial.

**AL CUARTO:** No está probado que el ataque haya sido dirigido contra unidades de la Policía Nacional, ni que los demandantes sean víctimas del mismo.

**A LAS SUBSIGUIENTES:** Es importante reiterar que la actividad policial y militar no fue la que causó los supuestos daños por los cuales se demandó, ni tienen una relación directa con los mismos, es decir, no existe un nexo de causalidad entre una acción u omisión de la entidad demandada y los perjuicios que debió soportar la actora en el caso en concreto.

Condenar a la Policía Nacional por el hecho de participar en el procedimiento de protección de la ciudadanía, al intentar conservar y preservar la seguridad pública, sin ser esta la causante directa de los perjuicios, conlleva a una indeterminación en el actuar de esta entidad y a una absurda paradoja, ya que, si no hace frente a las instigaciones armadas, omite el cumplimiento de sus funciones, pero si las cumple resulta responsable de perjuicios que sean ocasionados, por la única razón de que actuó en cumplimiento de su deber.

Resulta distinta la posición en donde se le imputa responsabilidad al Estado cuando ejecuta operaciones que buscan cumplir los deberes y obligaciones constitucionales y legales que se le han encomendado y con esta específica conducta causa un perjuicio a un ciudadano, el cual sobrepasa los cargos que toda persona debe soportar por el hecho de vivir en comunidad.

La diferencia entre uno y otro caso es, más que grande, evidente: en el primero, la administración no causa el daño con su obrar, al paso que en el segundo sí lo hace. Ante esto, cabe recordar y poner de presente que conforme al artículo 90 de la Constitución, el Estado responde "por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas", no por los daños que sean imputables a terceros, como los ocurridos en este caso y que, como quedó visto, fueron producto de una agresión por parte de un grupo indeterminado que atacó a la comunidad **de Miranda - Cauca**.



*Por ende, los daños que deben ser indemnizados por el Estado deben provenir de situaciones en donde se encuentre plenamente probado el nexo de causalidad existente entre su propia acción u omisión en respuesta a una situación concreta y el daño que con dicha conducta se generó al administrado, así y en todo caso, los perjuicios originados en o por hechos de un tercero no tienen por qué ser asumidos por el Estado y, por tanto, no pueden ser fuente de responsabilidad estatal. Ante los hechos descritos anteriormente y de acuerdo a los resultados dejados por el atentado terrorista del 2014, estamos ante un ataque terrorista encaminado a afectar única y exclusivamente a la población civil de Miranda -Cauca, bajo el entendido que fue una acción indiscriminada, al dejar a su suerte a los ciudadanos que se encontraban disfrutando de sus derechos constitucionales y legales.*

*Siendo así las cosas, resulta oportuno recordar aquí, como ya en reiteradas ocasiones lo ha sostenido la jurisprudencia, que los atentados terroristas dirigidos en forma indiscriminada contra la población resultan imprevisibles para las autoridades públicas, a menos que se produzcan amenazas previas que permitan adoptar oportunamente medidas de protección. No existe entonces, en estos casos, una omisión del Estado que pueda constituirse en causa del hecho, por no haber impedido la acción de la delincuencia guerrillera. Tampoco se presente un riesgo excepcional que afecte a un grupo específico de ciudadanos, creado por la misma administración en cumplimiento de sus funciones.*

*Ahora, teniendo en cuenta que aún no obran pruebas que nos permitan deducir tal situación, no tendría cabida en el asunto que nos ocupa la teoría de la falla en el servicio, ni la teoría del riesgo excepcional, puesto que no está demostrado que la acción de los subversivos estaba encaminada única y exclusivamente a atacar contra las instalaciones de la Policía Nacional.*

*En algunas oportunidades similares a esta, se ha encontrado responsable a la administración por los daños causados por los grupos subversivos, cuando se presentan circunstancias especiales que rodean casos particulares y que permiten concluir la existencia de falla o falta en el servicio, porque a pesar de existir unas circunstancias especialmente peligrosas, que permiten prever la ocurrencia de los ataques, no se tomaron las medidas necesarias para evitarlos; pero esta no es la situación presentada, porque, la falla en el servicio, como lo ha reiterado el Consejo de Estado, es una noción relativa que debe examinarse dentro de las circunstancias concretas de cada caso, sin que puede exigírsele a la administración el cumplimiento de obligaciones que dadas las condiciones específicas del propio Estado son de imposible cumplimiento.*

*Por lo tanto, hasta el momento no hay prueba en el plenario que demuestre que el Estamento falló a sus deberes constitucionales y que ésta sea la razón para eventualmente responsabilizar a la administración, puesto que no debe olvidarse que el **día 26 de marzo de 2019 en el municipio de Miranda**, sin que se acepte que el ataque iba dirigido contra mi defendida, había presencia de la Policía cuyos uniformados cumplieron valerosamente con su función, lo que evidencia, el decidido comprometimiento con los postulados constitucionales que le imponen a las autoridades del Estado la misión fundamental de velar por la vida, honra y bienes de todas las personas residentes en Colombia.*

*Es de observar que la casa donde vivían los demandantes fue destruida no por el hecho de estar al lado de la estación de Policía, sino porque fue en un ataque general a toda la comunidad, tan cierto es, que también fueron destruidas las oficinas de Telecom, la Caja Agraria y el puesto de salud de la Población".*

#### **NO SE ACREDITO QUE EL ATAQUE TERRORISTA FUERA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA LA POLICÍA NACIONAL**

*Si bien es cierto, durante el transcurrir procesal se logró acreditar que el día 26 de marzo de 2019 en el municipio de Miranda - Cauca, se presentó un atentado terrorista contra la instalaciones Alcaldía Municipal, pero no se logró demostrar fehacientemente que los explosivos iban dirigidos para la Estación de Policía, bajo el entendido que existen pruebas que en el mismo. Es decir que la parte demandante no cumplió con la carga de acreditar la concurrencia de los elementos inherentes al régimen de responsabilidad en el cual trata de amparar sus pretensiones, exclusivamente la conducta activa u omisiva de la **POLICIA NACIONAL** en la producción del hecho que aduce como dañoso a sus prohijado. Se tiene*





el reporte para el día 26/03/2019 a las 06:05 horas, en la Alcaldía de Miranda Cauca, En la madrugada de este martes los criminales volvieron a actuar y en un parqueadero contiguo a la alcaldía de Miranda detonaron una motocicleta que cargaron con explosivos; por fortuna en ese hecho no hubo víctimas y los daños materiales fueron mínimos.

Frente a lo enunciado en las líneas precedentes debo ser enfático a la hora de señalar que no se han acreditado los elementos integrantes de la responsabilidad civil extracontractual del Estado cuales son una acción u omisión, la producción de un daño antijurídico y el nexo causal existente entre los dos primeros, pues es claro que hasta el momento no se vislumbra asomo alguno que el actor resultara lesionado como consecuencia de un procedimiento policial.

El mismo **CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A**, que en Sentencia de marzo 10 de 2011, proferida dentro del Expediente: **63001233100019980088001**, Consejero Ponente: **Doctor MAURICIO FAJARDO GÓLJEZ** señala en la citada providencia en relación con la carga de la prueba:

La noción de carga ha sido definida como “una especie menor del deber consistente en la necesidad de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los varios que excitaban al sujeto”<sup>1</sup>. La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir —incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamente— con la prestación respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta —la aludida carga—, a aquél en quien recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no la lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas que tal omisión le acarree.

Trayendo este concepto al ámbito del proceso y de la actividad probatoria dentro del mismo, la noción de carga se traduce en que a pesar de la igualdad de oportunidades que, en materia de pruebas, gobierna las relaciones entre las partes procesales, dicho punto de partida no obsta para que corra por cuenta de cada una de ellas la responsabilidad de allegar o procurar la aportación, al expediente, de la prueba de ciertos hechos, bien sea porque los invoca en su favor, bien en atención a que de ellos se deduce lo que pide o a lo que se opone, ora teniendo en cuenta que el hecho opuesto está exento de prueba —verbigracia, por venir presumido por la ley o por gozar de notoriedad o por tratarse de una proposición (afirmación o negación) indefinida.

Continúa la citada providencia señalando que corren por cuenta y riesgo de quien pretende acreditar una circunstancia que le favorezca debe correr con la carga de soportar tales situaciones, ateniéndose a las consecuencias desfavorables derivadas de su inactividad probatoria. Al respecto señala:

“...En ese orden de ideas, el concepto de carga de la prueba se convierte en (i) una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de preferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadernamiento la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, (ii) en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo siendo acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias

<sup>1</sup> HINESTROSA, Fernando, Derecho Civil Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 1969, p. 180.



desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo.

Como fácilmente puede advertirse, el aspecto en últimas más trascendente de las reglas de la carga de la prueba se concreta en las consecuencias que se derivan de su no satisfacción, esto es, del no ejercicio de los derechos a la aportación o solicitud de práctica de pruebas o a la formulación de alegaciones dentro del proceso, si se tiene en cuenta que la finalidad de éste, para las partes, es la estimación o desestimación de la(s) pretensión(es) formulada(s) y que, por ello, dentro de él se lleve a cabo una instrucción encaminada a proporcionar al juzgador los elementos necesarios para que pueda efectuar la comparación entre los fundamentos de tal(es) pretensión(es) y el ordenamiento jurídico<sup>2</sup>. Y el de las consecuencias del incumplimiento de la carga de probar o de alegar es el aspecto más relevante, habida cuenta de que la parte que desee obtener un resultado favorable a sus pretensiones necesitará probar y alegar todo aquello que sea útil y pertinente para la defensa de su posición.

Para el Honorable Consejo de Estado es claro que a pesar que no exista un imperativo Legal que señale un deber de probar la consecuencia nefasta de no hacerlo será la negación de sus pretensiones, precisando al respecto en la providencia citada:

*"...En otros términos, «no existe un deber de probar, pero él no probar significa en la mayoría de los casos la derrota » {37} las reglas de la carga de la prueba sirven para establecer cuál de las partes tendrá que soportar el resecado desfavorable derivado de una actividad probatoria o de la falta de alegación o de una alegación incompleta (38), pues aunque el juez no disponga de todos los hechos cuyo conocimiento hubiera resultado necesario para fallar en uno u otro sentido, la prohibición de «non liquet» le obliga a resolver, en todo caso. Es entonces cuando las reglas de la carga de la prueba le indicarán en cabeza de cuál de las partes recaía la obligación de haber acreditado un determinado hecho y, por consiguiente, a quién corresponderá adscribir, en la sentencia, las consecuencias desfavorables derivadas de su no demostración, pues dichas reglas, precisamente, permiten al fallador cumplir con su función de resolver el litigio cuando falta la prueba, sin tener que abstenerse de dirimir, de fondo, la cuestión, para no contrariar, con un pronunciamiento inhibitorio, los principios de economía procesal y de eficacia de la función jurisdiccional. De ahí su importancia, pues "[S]i no existiera esta regla de juicio que faculta al juez para evitar el non liquet cuando falte la prueba, sería muy frecuente el fracaso del proceso y la consiguiente pérdida de tiempo, trabajo y dinero para el Estado y las partes. La justicia y la función jurisdiccional del Estado resultarían entorpecidas y frustraos en infinidad de ocasiones de no ser posible la sentencia de mérito, a la vez que se fomentaría la incertidumbre jurídica en las relaciones sociales, la repetición indefinida de procesos para el mismo litigio, y se permitiría que quienes tengan interés en esa situación caótica puedan fácilmente burlar lo fines interés público del proceso y la jurisdicción, ocultando prunas y entorpeciendo la actividad oficiosa del juez." (Subrayado a propósito)*

Entonces resulta pertinente señalar que para el caso en concreto no solo basta con enunciar de manera retórica la ocurrencia de unos hechos según los cuales se ocasionó un daño antijurídico a un ciudadano, sino que a quien plantea tales circunstancias de tiempo, modo y lugar, debió probar sin lugar a dudas, sus afirmaciones, a través de cualquiera de los medios probatorios establecidos para ello, carga con la cual no se

---

<sup>2</sup> GUASP, Jaime, *Derecho Procesal Civil*, I, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1.968, p. 312.



ha cumplido en este litigio, acudiendo nuevamente a los planteamientos jurisprudenciales para destacar que de acuerdo a la sentencia traída a colación, se precisa a! respecto:

*"...La carga de la prueba es, por consiguiente, una medida imprescindible de sanidad jurídica y una condición sine qua non de toda buena administración de justicia.*

*Por otro aspecto, según opinan vanos actores, es la guía imprescindible y fundamental del juzgador en la solución de los litigios, que orienta su criterio en la fijación de los hechos que sirven de base a su decisión: "sustrahe el derecho al arbitrio de la probabilidad y lo coloca bajo la elegida de la certeza"(39).*

*Conviene precisar, en cualquier caso, que las reglas de la carga de la prueba son apenas un sucedáneo c/a la actividad probatoria de las partes y, por tanto, sólo determinan el sentido de la decisión en ausencia de prueba. Pero si esta es suficiente, las aludidas reglas no deben tener aplicación, pues ellas distribuyen entre las partes la falta de certeza y se convierten en un parámetro de decisión del cual se valdrá el juez ante el hecho incierto o desconocido, luego no sustituyen la actividad probatoria de la parte gravada con la carga de acreditar un hecho, sino la prueba en sí misma, considerada objetivamente, cualquiera que debiera ser su origen, de modo que solamente cuando falta la prueba, debe el juez examinar a quién correspondía la responsabilidad de suministrarla, para apelar, en su contra, las consecuencias desfavorables correspondientes. Desde esta perspectiva, las reglas de la carga c/e /a prueba estimulan a las partes a demostrar los hechos que les interesan, precisamente para evitar que el juez aplique la regla aludida como sucedánea de los elementos de prueba indispensables para acreditar los supuestos de hecho de las normas jurídicas con base en las cuales proferirá sentencia." (Subrayado a propósito)*

### EXCEPCIONES DE FONDO

#### **a. EXCEPCION DE FONDO INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL A FAVOR DE LA POLICIA NACIONAL**

##### **AUSENCIA DEL NEXO CAUSAL**

*Le corresponde a la parte actora demostrar cada uno de los hechos sobre los cuales basa las pretensiones de la demanda, o sea, acreditar cada uno de los perjuicios solicitados en los cuales se pretende tratar de hacer ver una responsabilidad a mí defendida la Policía Nacional.*

*Para declarar la responsabilidad de la entidad demandada en este caso **La Policía Nacional** se deben acreditar los siguientes requisitos:*

- ❖ *La existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios.*
- ❖ *La omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso.*
- ❖ *Un daño antijurídico (**QUE NO SE ARRIMO AL EXPEDIENTE PARA SU ACREDITACION**)  
y*
- ❖ *La existencia de relación de causalidad entre la obligación omitida y el daño. (LA CUAL NO EXISTE).*





La imputación es el elemento de la responsabilidad que permite atribuir jurídicamente en daño a un sujeto determinado. Pero la aplicación del artículo 90 de la constitución política impone la obligación de analizar la responsabilidad del estado, desde la perspectiva de la víctima y desde allí determinar: si el daño sufrido por la víctima fue causado por la entidad demandada; si le es imputable a dicha entidad; y si tiene el carácter de antijurídico, esto es, si la víctima no debe soportarlo

### **INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL EN RELACION CON EL HECHO Y EL PERJUICIO OCASIONADO.**

Al respecto es preciso señalar que de las afirmaciones efectuadas por el apoderado judicial de la parte demandante no asoma indicio alguno que relacione a mi representada con la causación de lesiones o daño alguno, pues como se desprende de la sola lectura del texto de la demanda, en esta no se detallan circunstancias de tiempo, modo y lugar que puedan llevarnos a concluir que evidentemente existieron unas lesiones, causadas por miembros de la Policía Nacional, mucho menos que estas hayan causado un daño antijurídico atribuible a mi prohijada, razón por la cual han de desecharse todos los argumentos que apunten a este tipo de imputaciones.

Es sabido que para que exista la responsabilidad se requiere de tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquél aparece ligado a ésta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad, y para caso en cuestión, no existe relación de causa-efecto, puesto que no existe relación jurídica laboral o material, entre los demandantes (**los perjuicios y/o daños de la señora ROSA ERMILA MAMIAN BOLAÑOS Y OTROS, acaecieron a raíz de sus propias acciones**) y la **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL**, así las cosas, lo que también ayudo a generar el accidente de tránsito donde se generaron las lesiones de la demandante, siendo así las cosas, esta conducta peligrosa sería la raíz determinante de los perjuicios de los demandantes, es decir que la demandante asumió su propio riesgo al tomar un servicio de transporte informal, donde no se pueda certificar la idoneidad y pericia del conductor quien al parecer según lo considera esta defensa no acatar la reducción de la velocidad de su motocicleta al llegar a la intersección lugar donde se generó el accidente, de tal manera que no tiene sentido continuar el ejercicio de responsabilidad administrativa en contra de la Policía Nacional.

### **FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA DEFENSA**

Esta esquina exterioriza que, la Policía Nacional no está llamada a conformar la Litis dentro de la presente contienda, puesto que se configura la **EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**, toda vez que el ataque terrorista perpetrado por el grupo al margen de ley en el municipio de Corinto, departamento de Cauca, fue contra las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Miranda, y población civil, en relación con el evento terrorista, se solicitó la información al Centro Automático de Despacho (CAD), donde se evidencia la novedad ocurrida en la Alcaldía Miranda Cauca, así: **El día 26/03/2019 a las 06:05 horas, en la Alcaldía de Miranda Cauca, En la madrugada de este martes los criminales volvieron a actuar y en un parqueadero contiguo a la alcaldía de Miranda detonaron una motocicleta que cargaron con explosivos; por fortuna en ese hecho no hubo víctimas y los daños materiales fueron mínimos.**

### **INEXISTENCIA DE FALLA EN EL SERVICIO, INEXISTENCIA DE RIESGO EXCEPCIONAL Y/O DAÑO ESPECIAL**

Dentro de la presente contienda, no se configura falla del servicio, ni tiene cabida la teoría de riesgo excepcional o daño especial, puesto que no existió acción u omisión reprochable de las autoridades



*Policiales, por el contrario, en virtud del mandato constitucional, la Policía Nacional siempre ha prestado un servicio ininterrumpido, diligente, efectivo en el departamento del Cauca, municipio de Corinto, de igual forma, los convocantes No fueron sometidas a soportar una carga superior a la que común mente estaban obligadas a soportar, por cuanto mi Mandante siempre propendió y garantizo el libre ejercicio de las libertades públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes del municipio Corinto Cauca, a objeto de establecer la armonía social, la convivencia ciudadana en este territorio.*

*Siendo así las cosas, resulta oportuno recordar aquí, como ya en reiteradas ocasiones lo ha sostenido la jurisprudencia, que los atentados terroristas dirigidos en forma indiscriminada contra la población resultan imprevisibles para las autoridades públicas, a menos que se produzcan amenazas previas que permitan adoptar oportunamente medidas de protección. No existe entonces, en estos casos, una omisión del Estado que pueda constituirse en causa del hecho, por no haber impedido la acción de la delincuencia guerrillera. Tampoco se presente un riesgo excepcional que afecte a un grupo específico de ciudadanos, creado por la misma administración en cumplimiento de sus funciones. Correspondiéndole entonces a la parte actora probar irrefutablemente que el ataque subversivo perpetrado contra la población de Miranda – Cauca, estaba dirigido única y exclusivamente contra la Población Civil. Ahora, teniendo en cuenta que aún no obran pruebas que nos permitan deducir tal situación, no tendría cabida en el asunto que nos ocupa la teoría de la falla en el servicio, ni la teoría del riesgo excepcional, puesto que no está demostrado que la acción de los subversivos estaba encaminada única y exclusivamente a atacar contra las instalaciones de la Policía Nacional.*

*En algunas oportunidades similares a esta, se ha encontrado responsable a la administración por los daños causados por los grupos subversivos, cuando se presentan circunstancias especiales que rodean casos particulares y que permiten concluir la existencia de falla o falta en el servicio, porque a pesar de existir unas circunstancias especialmente peligrosas, que permiten prever la ocurrencia de los ataques, no se tomaron las medidas necesarias para evitarlos. Pero esta no es la situación presentada, porque, la falla en el servicio, como lo ha reiterado el Consejo de Estado, es una noción relativa que debe examinarse dentro de las circunstancias concretas de cada caso, sin que puede exigírsele a la administración el cumplimiento de obligaciones que dadas las condiciones específicas del propio Estado son de imposible cumplimiento.*

*Por lo tanto, hasta el momento no hay prueba en el plenario que demuestre que el Estamento fallo a sus deberes constitucionales y que ésta sea la razón para eventualmente responsabilizar a la administración, puesto que no debe olvidarse que el día 26/03/2019, en el municipio de Miranda Cauca había presencia de la Policía, cuyos uniformados cumplieron valerosamente con su función, lo que evidencia, el decidido comprometimiento con los postulados constitucionales que le imponen a las autoridades del Estado la misión fundamental de velar por la vida, honra y bienes de todas las personas residentes en Colombia.*

*El Consejo de Estado en un caso similar al que hoy nos ocupa, en sentencia del 27 de Noviembre de 2003, Exp. No. 14220; Actor María Fabiola González Gutiérrez; C. P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra, expresó lo siguiente.*

*“No es posible atribuir responsabilidad alguna al Estado, por cuanto fue un ataque masivo que afectó a toda la población, no tenía como objetivo la toma de la estación de policía, pues no sólo se destruyó ésta, sino también las Instalaciones de Telecom, de la Caja Agraria, la casa donde vivían los demandantes, entre otras. Por lo tanto, el atentado fue indiscriminado, no selectivo con la finalidad de atacar contra todos los costados de la población sembrando pánico y desconcierto social; fue un ataque sorpresivo en el tiempo y en el espacio, planeado y ejecutado sigilosamente, por lo mismo, al no existir razonables perspectivas que evidenciaran un eminente ataque, dicha citación se convierte en una (sic) circunstancia imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública.*”

*Es de observar que la casa donde vivían los demandantes fue destruida no por el hecho de estar al lado de la estación de Policía, sino porque fue en un ataque general a toda la*



comunidad, tan cierto es, que también fueron destruidas las oficinas de Telecom, la Caja Agraria y el puesto de salud de la Población”.

Posteriormente, en sentencia de fecha 20 de mayo de 2004, siendo Magistrado el Dr. Ramiro Saavedra Becerra; Exp. No. 1405; Actor Raque Urimendez y Otros, Se dijo:

“ En el presente caso, se imputa responsabilidad a la entidad demandada por que el hecho dañoso- muerte de Gustavo Pérez Galíndez – se produjo durante el enfrentamiento armado que sostuvo la Policía Nacional con subversivos, sosteniendo la parte actora que se imputa la producción del hecho a la entidad demandada puesto que la víctima “resulta inocente de la guerra que a diario libran la fuerza pública y la fuerza de la subversión o revolucionaria”, por lo tanto, alega que “es de justicia, de equidad, que el Estado también salga en defensa de esa víctima y repare la lesión antijurídica causada a él y a su familia. Sólo así se fortalece y restablece el principio de equilibrio en la distribución de las cargas que deben soportar todos los administrados” (FL. 38 C. No. 1); al respecto la Sala ha sostenido que en los casos de daños producidos en desarrollo de actividades peligrosas como lo es el manejo de armas de fuego el título de imputación no es otro que el fundamento en la actividad generadora de riesgo (riesgo excepcional), donde, por una parte, al demandante sólo le basta probar el daño antijurídico y el nexo causal, y por otra parte, a la entidad demandada, para exonerarse de responsabilidad, le corresponderá probar una causa extraña que rompa dicho nexo, estos es, fuerza mayor, hecho o culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero. Sin embargo, como se verá más adelante, aplicándolo al presente caso, no procede deducir responsabilidad alguna, porque se encuentra demostrado en el plenario que el hecho dañoso lo produjo un tercero....

Teniendo en cuenta la forma como se desarrollaron los hechos, en el presente caso no se le puede atribuir responsabilidad alguna a la entidad demandada, toda vez que el daño causado por un tercero, grupo al margen de la ley que atacó con fines delincuenciales y de desequilibrio social varios costados de la población de Piendamó Cauca, la cual contaba, dentro de las posibilidades reales del país, con el armamento y el personal estrictamente necesario, encontrándose en la Estación de Policía de Piendamó aproximadamente diez agentes que repelieron el ataque en condiciones totalmente desfavorables, debido, de un lado a la desproporción, puesto que se trataba de cuarenta o más subversivos, y de otro, al elemento “sorpresa” de la acción delictiva, lo cual trajo como resultado el lógico desastre que se generó en dicha localidad, donde tanto los agentes de policía como la población de Piendamó Cauca fueron víctimas del ataque guerrillero, pues cabe observar que no solo se violentaron las instalaciones del Cuartel de Policía, sino también las del Banco del Estado y la Caja Agraria, generando perjuicios de orden económico y segando la vida de cuatro personas..

#### **INEXISTENCIA DEL NEXO DE CAUSALIDAD E IMPOSIBILIDAD DE IMPUTARLE EL DAÑO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (POLICÍA NACIONAL); Y EL HECHO DE UN TERCERO.**

Es sabido que para que exista la responsabilidad se requiere de tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El día 26/03/2019 a las 06:05 horas, en la Alcaldía de Miranda Cauca, En la madrugada de este martes los criminales volvieron a actuar y en un parqueadero contiguo a la alcaldía de Miranda detonaron una motocicleta que cargaron con explosivos; por fortuna en ese hecho no hubo víctimas y los daños materiales fueron mínimos. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para



*poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquél aparece ligado a ésta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad, por lo tanto, en la presente contienda, al no haber conexión entre el daño que sufrieron los grupos familiares convocantes, en otras palabras, el hecho generador del daño y el daño probado, es imposible atribuir responsabilidad administrativa a mi Defendida, habida cuenta que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, donde se evidencia la novedad ocurrida en el Estación de Policía Corinto, así: el día 07/08/2018 a las 17:05 horas, en la calle 8 con carrera 9 barrio Centro municipio Corinto Cauca, se registró la detonación de una motocicleta acondicionada con explosivos a pocos metros de la garita ubicada contiguo al parque principal, resultando levemente lesionados..., asimismo daños materiales a una residencia ubicada junto a la garita en mención, hechos materia de investigación...*

*El HECHO DE UN TERCERO se configura de acuerdo a los soportes probatorios que obran dentro del plenario, por lo que sigue, es que el desplazamiento forzado fue sorpresivo, perpetrado por un Tercero.*

*La jurisprudencia contenciosa ha considerado que para que se presente la figura del hecho del tercero como causal de exoneración de responsabilidad, es necesario que confluyan los siguientes elementos:*

- A. Debe ser un hecho único exclusivo y determinante del daño producido.*
- B. Debe ser un hecho producido por circunstancias imprevisibles e irresistibles para quien lo alega.*

*Requisitos que se constatan en el caso sub lite, pues se tiene probado que el desplazamiento fue el “HECHO DE UN TERCERO” de forma sorpresiva, es decir, el hecho fue imprevisible e irresistible; razón por la cual, no puede alegar la parte Convocante en el caso en cuestión que el daño es atribuible a mi Representada, pues está demostrado que la Policía Nacional, se encuentra ajena a la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que se presentó el referido desplazamiento forzado en contra de los convocantes.*

#### **INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL EN RELACION CON EL HECHO Y EL PERJUICIO OCASIONADO.**

*Al respecto es preciso señalar que de las afirmaciones efectuadas por el apoderado judicial de la parte demandante, no asoma indicio alguno que relacione a mi representada con la causación de lesiones o daño alguno, pues como se desprende de la sola lectura del texto de la demanda, en esta no se detallan circunstancias de tiempo, modo y lugar que puedan llevarnos a concluir que evidentemente existieron unas lesiones, causadas por miembros de la Policía Nacional, mucho menos que estas hayan causado un daño antijurídico atribuible a mi prohijada, razón por la cual han de desecharse todos los argumentos que apunten a este tipo de imputaciones.*

*El mismo CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A, que en Sentencia de marzo 10 de 2011, proferida dentro del Expediente: 63001233100019980088001, Consejero Ponente: Doctor MAURICIO FAJARDO GÓMEZ señala en la citada providencia en relación con la carga de la prueba:*

*“...La noción de carga ha sido definida como “una especie menor del deber consistente en la necesidad de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los varios que excitaban al sujeto”(35). La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir – incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamente – con la prestación respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta – la aludida carga –, a aquel en quien recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no la*





*lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas que tal omisión le acarree.*

*Trayendo este concepto al ámbito del proceso y de la actividad probatoria desplegada dentro del mismo, la noción de carga se traduce en que a pesar de la igualdad de oportunidades que, en materia de pruebas, gobierna las relaciones entre las partes procesales, dicho punto de partida no obsta para que corra por cuenta de cada una de ellas la responsabilidad de allegar o procurar la aportación, al expediente, de la prueba de ciertos hechos, bien sea porque los invoca en su favor, bien en atención a que de ellos se deduce lo que pide o a lo que se opone, ora teniendo en cuenta que el hecho opuesto se encuentre exento de prueba –verbigracia, por venir presumido por la ley o por gozar de notoriedad o por tratarse de una proposición (afirmación o negación) indefinida.* (Subrayado a propósito)

Continúa la citada providencia señalando que corren por cuenta y riesgo de quien pretende acreditar una circunstancia que le favorezca debe correr con la carga de soportar tales situaciones, ateniéndose a las consecuencias desfavorables derivadas de su inactividad probatoria. Al respecto señala:

*“...En ese orden de ideas, el concepto de carga de la prueba se convierte en (i) una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadernamiento la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, (ii) en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo siendo acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo.*

*Como fácilmente puede advertirse, el aspecto en últimas más trascendente de las reglas de la carga de la prueba se concreta en las consecuencias que se derivan de su no satisfacción, esto es del no ejercicio de los derechos a la aportación o solicitud de práctica de pruebas o a la formulación de alegaciones dentro del proceso, si se tiene en cuenta que la finalidad de éste, para las partes, es la estimación o desestimación de la(s) pretensión(es) formulada(s) y que, por ello, dentro de él se lleve a cabo una instrucción encaminada a proporcionar al juzgador los elementos necesarios para que pueda efectuar la comparación entre los fundamentos de tal(es) pretensión(es) y el ordenamiento jurídico(36). Y el de las consecuencias del incumplimiento de la carga de probar o de alegar es el aspecto más relevante, habida cuenta de que la parte que desee obtener un resultado favorable a sus pretensiones necesitará probar y alegar todo aquello que sea útil y pertinente para la defensa de su posición.”* (Subrayado a propósito)

Para el Honorable Consejo de Estado es claro que a pesar que no exista un imperativo Legal que señale un deber de probar, la consecuencia nefasta de no hacerlo será la negación de sus pretensiones, precisando al respecto en la providencia citada:

*“...En otros términos, «no existe un deber de probar, pero el no probar significa en la mayoría de los casos la derrota»(37); las reglas de la carga de la prueba sirven para establecer cuál de las partes tendrá que soportar el resultado desfavorable derivado de una actividad probatoria o de la falta de alegación o de una alegación incompleta(38), pues aunque el juez no disponga de todos los hechos cuyo conocimiento hubiera resultado necesario para fallar en uno u otro sentido, la prohibición de «non liquet» le*





*obliga a resolver, en todo caso. Es entonces cuando las reglas de la carga de la prueba le indicarán en cabeza de cuál de las partes recaía la obligación de haber acreditado un determinado hecho y, por consiguiente, a quién corresponderá adscribir, en la sentencia, las consecuencias desfavorables derivadas de su no demostración, pues dichas reglas, precisamente, permiten al fallador cumplir con su función de resolver el litigio cuando falta la prueba, sin tener que abstenerse de dirimir, de fondo, la cuestión, para no contrariar, con un pronunciamiento inhibitorio, los principios de economía procesal y de eficacia de la función jurisdiccional. De ahí su importancia, pues*

*"[S]i no existiera esta regla de juicio que faculta al juez para evitar el non liquet cuando falte la prueba, sería muy frecuente el fracaso del proceso y la consiguiente pérdida de tiempo, trabajo y dinero para el Estado y las partes. La justicia y la función jurisdiccional del Estado resultarían entorpecidas y frustradas en infinidad de ocasiones al no ser posible la sentencia de mérito, a la vez que se fomentaría la incertidumbre jurídica en las relaciones sociales, la repetición indefinida de procesos para el mismo litigio, y se permitiría que quienes tengan interés en esa situación caótica puedan fácilmente burlar los fines de interés público del proceso y la jurisdicción, ocultando pruebas y entorpeciendo la actividad oficiosa del juez."*  
(Subrayado a propósito)

Entonces resulta pertinente señalar que para el caso en concreto no solo basta con enunciar de manera retórica la ocurrencia de unos hechos según los cuales se ocasionó un daño antijurídico a un ciudadano, sino que a quien plantea tales circunstancias de tiempo, modo y lugar, debió probar sin lugar a dudas, sus afirmaciones, a través de cualquiera de los medios probatorios establecidos para ello, carga con la cual no se ha cumplido en este litigio, acudiendo nuevamente a los planteamientos jurisprudenciales para destacar que de acuerdo a la sentencia traída a colación, se precisa al respecto:

*"...La carga de la prueba es, por consiguiente, una medida imprescindible de sanidad jurídica y una condición sine qua non de toda buena administración de justicia.*

*Por otro aspecto, según opinan varios autores, es la guía imprescindible y fundamental del juzgador en la solución de los litigios, que orienta su criterio en la fijación de los hechos que sirven de base a su decisión: "sustraе el derecho al arbitrio de la probabilidad y lo coloca bajo la égida de la certeza"(39).*

*Conviene precisar, en cualquier caso, que las reglas de la carga de la prueba son apenas un sucedáneo de la actividad probatoria de las partes y, por tanto, sólo determinan el sentido de la decisión en ausencia de prueba. Pero si esta es suficiente, las aludidas reglas no deben tener aplicación, pues ellas distribuyen entre las partes la falta de certeza y se convierten en un parámetro de decisión del cual se valdrá el juez ante el hecho incierto o desconocido, luego no sustituyen la actividad probatoria de la parte gravada con la carga de acreditar un hecho, sino a la prueba en sí misma, considerada objetivamente, cualquiera que debiera ser su origen, de modo que solamente cuando falta la prueba, debe el juez examinar a quién correspondía la responsabilidad de suministrarla, para aplicar, en su contra, las consecuencias desfavorables correspondientes. Desde esta perspectiva, las reglas de la carga de la prueba estimulan a las partes a demostrar los hechos que les interesan, precisamente para evitar que el juez aplique la regla aludida como sucedánea de los elementos de prueba indispensables para acreditar los supuestos de hecho de las normas jurídicas con base en las cuales proferirá sentencia."* (Subrayado a propósito)



*Aditivo a lo expuesto, para el Mando Institucional, nunca será ampuloso reiterar sobre los factores que en el servicio policial inciden, en lo referente a la defensa y el respeto a los derechos fundamentales, por ser temática inherente e inescindible de lo policial, al respecto y para poder responsabilizar a una entidad pública, se requiere la presencia de tres (3) elementos reiterados jurisprudencialmente:*

- 1. EL HECHO.** *Causado por un funcionario en ejercicio de sus labores o con algún tipo de dependencia con el servicio,*
- 2. EL DAÑO.** *Infringido a una o varias personas; el cual debe ser cierto, determinado, concreto.*
- 3. EL NEXO CAUSAL.** *Entendido como la unión - vinculante existente entre los dos elementos, de tal manera que el uno sea la consecuencia del otro y que no medie entre las circunstancias especiales que excluyan la relación causal.*

*Según lo anterior, es menester determinar a lo largo del acápite probatorio que se acopie en el proceso, si el daño en definitiva tuvo relación alguna con la prestación del servicio de Policía, ya que de la demostración de estos tres (3) elementos, depende el que las pretensiones de la parte actora puedan prosperar, porque ninguna de las partes intervinientes en un proceso de conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la ley exonera de la obligación de probar de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil concordante con el 167 del Código General del Proceso.*

*Para que se configure esta causal deben observarse los siguientes requisitos:*

- 1. QUE EXISTA UNA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL HECHO DE LA VÍCTIMA Y EL DAÑO.**
- 2. QUE EL HECHO DE LA VÍCTIMA SEA EXTRAÑO Y NO IMPUTABLE AL OFENSOR Y**
- 3. QUE EL HECHO DE LA VÍCTIMA SEA ILÍCITO Y CULPABLE.**

*Ahora bien, en relación con los hechos que intervienen en la producción del daño, el Consejo de Estado ha precisado que estos pueden ser materiales o jurídicos, entendidos como:*

**"...los que físicamente se perciben en el desenvolvimiento de los hechos; son causas inmediatas del hecho y físicamente concretan el daño; en cambio los hechos jurídicos son la fuente normativa de los deberes y obligaciones en los cuales se sustentan el derecho de reclamación, la declaratoria de responsabilidad y la indemnización de perjuicios..." (Sentencia del 27 de noviembre de 2003, expediente 14571).**

*Es así, como a partir del acápite probatorio que se acopie en el proceso, puede materializarse dicha causal de exoneración a favor de la entidad demandada.*

*Son estas las consideraciones de la defensa que nos permiten manifestar, que en el sub judice, se presentó la aplicación de dicha causal de exoneración, causal por lo cual debe ser exonerada la entidad demandada.*

*Al respecto, así se ha pronunciado el Honorable Consejo de Estado en fallo del 14 de Febrero de 1994, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo con ponencia de la Dra. **CONSUELO SARRIA** en donde se expresa:*

**"Los hechos son causa pretendí de la demanda, en cuanto configuren lo causa jurídica en que se fundamenta el derecho objeto de las pretensiones por eso desde el punto de vista procesal, su afirmación**



constituye un acto jurídico que tiene la trascendencia y alcance de definir los términos de la controversia y por lo tanto el alcance de la Sentencia, y debe ser objeto del debate durante el proceso, "para que si al final se encuentran debidamente probados puedan prosperar las peticiones de la demanda", ya que q\ respecto de ellos pueden pronunciarse el izqdo. En perfecta congruencia. (Las negrillas son nuestras).

Así mismo, nuevamente el Honorable Consejo de Estado en la jurisprudencia vigente relacionada con la responsabilidad extra contractual del Estado, se ha pronunciado en torno a la imputabilidad del daño señalando:

"De allí que el elemento indispensable- aunque no siempre suficiente - para la imputación, es el nexa causal entre el hecho causante del daño y el daño mismo, de modo que este sea efecto del primero. Por eso, la parte última del inciso primero del artículo 90 de la CP. En cuanto exige - en orden a deducir la responsabilidad patrimonial del estado -, que los daños antijurídicos sean "causados por la acción u omisión de las autoridades públicas", está refiriéndose al fenómeno de la imputabilidad patrimonial del Estado tanto fáctica como jurídica". (Sentencia del 21 de octubre de 1999, sección 3ª expediente 10948-11643 Dr. Alier E. Hernández).

De este pronunciamiento es claro, que la imputabilidad del daño debe demostrarse desde la fundamentación fáctica como jurídica y que permita al juzgador administrativo generar la certeza de que el daño fue producto de una acción u omisión del Estado, de modo que el perjuicio sea efecto de tal acción, es decir, que exista entre el hecho y el daño una relación de causalidad.

#### HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA

De los planteamientos anteriormente esbozados, se puede establecer que no hay responsabilidad de la **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL**, ya que sucedió una circunstancia excluyente de antijuridicidad, por tratarse de una culpa exclusiva de la víctima. Al respecto, cabe señalar que se configura la causal de exoneración, denominada **HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA**, por la conducta decisiva, determinante y situaciones que en conjunto hace que fácilmente se deduzca, que fue la señora MARISELA SOTO Y OTROS, el causante de los hechos por los cuales ahora se pretende endilgar responsabilidad a la Policía Nacional.

Al respecto el Honorable Consejo de Estado, ha precisado que al igual que las otras eximentes de responsabilidad, tres (3) son los elementos determinantes para que se configure la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad estatal, y para el caso concreto se configuran de la siguiente manera:

**1. IRRESISTIBILIDAD:** En términos generóles, la irresistibilidad hace referencia a que el daño debe ser inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, toda vez que si bien se debe llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, toda vez que en todo caso la imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de vida.

**2. IMPREVISIBILIDAD:** Hace referencia a la condición imprevista del caso en concreto con lo cual resulta indispensable que se trate de un "acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia". En este sentido, el Consejo de Estado ha sostenido que "resulta mucho más razonable entender por imprevisto aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia".



**3. EXTERIORIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA:** Respecto del demandado "se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que se invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe imputarse a la culpa del agente (...) la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido que ha de tratarse de un suceso o acontecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada.

Aditivo a lo expuesto, para el Mando Institucional, nunca será ampuloso reiterar sobre los factores que en el servicio policial inciden, en lo referente a la defensa y el respeto a los derechos fundamentales, por ser temática inherente e inescindible de lo policial, al respecto y para poder responsabilizar a una entidad pública, se requiere la presencia de tres (3) elementos reiterados jurisprudencialmente:

- 1. EL HECHO.** Causado por un funcionario en ejercicio de sus labores o con algún tipo de dependencia con el servicio.
- 2. EL DAÑO.** Infringido a una o varias personas; el cual debe ser cierto, determinado, concreto.
- 3. EL NEXO CAUSAL.** Entendido como la unión - vinculante existente entre los dos elementos, de tal manera que el uno sea la consecuencia del otro y que no medie entre las circunstancias especiales que excluyan la relación causal.

**El mismo CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A, que en Sentencia de marzo 10 de 2011, proferida dentro del Expediente: 630012331000119980088001, Consejero Ponente: Doctor MAURICIO FAJARDO GÓMEZ señala en la citada providencia en relación con la carga de la prueba:**

"...La noción de carga ha sido definida como "una especie menor del deber consistente en la necesidad de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los varios que excitaban al sujeto" (35). La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir – incluso pudiendo ser competido a ello coercitivamente – con la prestación respecto de lo cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta – la aludida carga –, a aquel en quien recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no la lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas que tal omisión le acarree.

Trayendo este concepto al ámbito del proceso y de la actividad probatoria desplegada dentro del mismo, la noción de carga se traduce en que a pesar de la igualdad de oportunidades que, en materia de pruebas, gobierna las relaciones entre las partes procesales, dicho punto de partida no obsta para que corra por cuenta de cada una de ellas la responsabilidad de allegar o procurar la aportación, al expediente, de la prueba de ciertos hechos, bien sea porque los invoca en su favor, bien en atención a que de ellos se deduce lo que pide o a lo que se opone, ora teniendo en cuenta que el hecho opuesto se encuentre exento de prueba – verbigracia, por venir presumido por la ley o por gozar de notoriedad o por tratarse de una proposición (afirmación o negación) indefinida." (Subrayado a propósito)

Es así, como a partir del acápite probatorio que se acopie en el proceso, puede materializarse dicha causal de exoneración a favor de la entidad demandada.

Son estas las consideraciones de la defensa que nos permiten manifestar, que en el sub judice, se presentó la aplicación de dicha causal de exoneración, causal por lo cual debe ser exonerada la entidad demandada.





Al respecto, así se ha pronunciado el Honorable Consejo de Estado en fallo del 14 de Febrero de 1994, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo con ponencia de la Dra. CONSUELO SARRIA en donde se expresa:

*"Los hechos son causa pretendí de la demanda, en cuanto configuren la causa jurídica en que se fundamenta el derecho objeto de las pretensiones por eso desde el punto de vista procesal, su afirmación constituye un acto jurídico que tiene la trascendencia y alcance de definir los términos de la controversia y por lo tanto el alcance de la Sentencia, y debe ser objeto del debate durante el proceso, **"para que si al final se encuentran debidamente probados puedan prosperar las peticiones de la demanda"**, ya que al respecto de ellos pueden pronunciarse el juzgador en perfecta congruencia. (Las negrillas son nuestras).*

#### **FALTA DE PRUEBAS - INEXISTENCIA DE LOS HECHOS OBJETO DE LA DEMANDA.**

Frente a lo enunciado en las líneas precedentes debo ser enfático a la hora de señalar que no se han acreditado los elementos integrantes de la responsabilidad civil extracontractual del Estado cuales son una acción u omisión, la producción de un daño antijurídico y el nexo causal existente entre los dos primeros, pues es claro que hasta el momento no se vislumbra asomo alguno que el actor resultara lesionado como consecuencia de un procedimiento policial.

El mismo CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A, que en Sentencia de marzo 10 de 2011, proferida dentro del Expediente: 63001233100019980088001, Consejero Ponente: Doctor MAURICIO FAJARDO GÓMEZ señala en la citada providencia en relación con la carga de la prueba:

*"...La noción de carga ha sido definida como "una especie menor del deber consistente en la necesidad de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los varios que excitaban al sujeto"(35). La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir — incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamente — con la prestación respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta — la aludida carga —, a aquel en quien recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no la lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas que tal omisión le acarree. Trayendo este concepto al ámbito del proceso y de la actividad probatoria desplegada dentro del mismo, la noción de carga se traduce en que a pesar de la igualdad de oportunidades que, en materia de pruebas, gobierna las relaciones entre las partes procesales, dicho punto de partida no obsta para que corra por cuenta de cada una de ellas la responsabilidad de allegar o procurar la aportación, al expediente, de la prueba de ciertos hechos, bien sea porque los invoca en su favor, bien en atención a que de ellos se deduce lo que pide o a lo que se opone, ora teniendo en cuenta que el hecho opuesto se encuentre exento de prueba — verbigracia, por venir presumido por la ley o por gozar de notoriedad o por tratarse de una proposición (afirmación o negación) indefinida." (Subrayado a propósito)*

Continúa la citada providencia señalando que corren por cuenta y riesgo de quien pretende acreditar una circunstancia que le favorezca debe correr con la carga de soportar tales situaciones, ateniéndose a las consecuencias desfavorables derivadas de su inactividad probatoria. Al respecto señala:

***"...En ese orden de ideas, el concepto de carga de la prueba se convierte en (i) una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadernamiento la prueba del hecho que***





*sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, (ii) en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo siendo acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo. Como fácilmente puede advertirse, el aspecto en últimas más trascendente de las reglas de la carga de la prueba se concreta en las consecuencias que se derivan de su no satisfacción, esto es del no ejercicio de los derechos a la aportación o solicitud de práctica de pruebas o a la formulación de alegaciones dentro del proceso, si se tiene en cuenta que la finalidad de éste, para las partes, es la estimación o desestimación de la(s) pretensión(es) formulada(s) y que, por ello, dentro de él se lleve a cabo una instrucción encaminada a proporcionar al juzgador los elementos necesarios para que pueda efectuar la comparación entre los fundamentos de tal(es) pretensión(es) y el ordenamiento jurídico(36). Y el de las consecuencias del incumplimiento de la carga de probar o de alegar es el aspecto más relevante, habida cuenta de que la parte que desee obtener un resultado favorable a sus pretensiones necesitará probar y alegar todo aquello que sea útil y pertinente para la defensa de su posición.” (Subrayado a propósito)*

Entonces resulta pertinente señalar que para el caso en concreto no solo basta con enunciar de manera retórica la ocurrencia de unos hechos según los cuales se ocasionó un daño antijurídico a un ciudadano, sino que a quien plantea tales circunstancias de tiempo, modo y lugar, debió probar sin lugar a dudas, sus afirmaciones, a través de cualquiera de los medios probatorios establecidos para ello, carga con la cual no se ha cumplido en este litigio, acudiendo nuevamente a los planteamientos jurisprudenciales para destacar que de acuerdo a la sentencia traída a colación, se precisa al respecto:

*“...La carga de la prueba es, por consiguiente, una medida imprescindible de sanidad jurídica y una condición sine qua non de toda buena administración de justicia. Por otro aspecto, según opinan varios autores, es la guía imprescindible y fundamental del juzgador en la solución de los litigios, que orienta su criterio en la fijación de los hechos que sirven de base a su decisión: “sustraе el derecho al arbitrio de la probabilidad y lo coloca bajo la égida de la certeza”(39). Conviene precisar, en cualquier caso, que las reglas de la carga de la prueba son apenas un sucedáneo de la actividad probatoria de las partes y, por tanto, sólo determinan el sentido de la decisión en ausencia de prueba. Pero si esta es suficiente, las aludidas reglas no deben tener aplicación, pues ellas distribuyen entre las partes la falta de certeza y se convierten en un parámetro de decisión del cual se valdrá el juez ante el hecho incierto o desconocido, luego no sustituyen la actividad probatoria de la parte gravada con la carga de acreditar un hecho, sino a la prueba en sí misma, considerada objetivamente, cualquiera que debiera ser su origen, de modo que solamente cuando falta la prueba, debe el juez examinar a quién correspondía la responsabilidad de suministrarla, para aplicar, en su contra, las consecuencias desfavorables correspondientes. Desde esta perspectiva, las reglas de la carga de la prueba estimulan a las partes a demostrar los hechos que les interesan, precisamente para evitar que el juez aplique la regla aludida como sucedánea de los elementos de prueba indispensables para acreditar los supuestos de hecho de las normas jurídicas con base en las cuales proferirá sentencia.” (Subrayado a propósito).*

#### **JURISPRUDENCIA SOBRE AFECTACIONES EN ATAQUES TERRORISTAS**

En reciente sentencia de unificación proferida el 20 de junio de 2017 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala Plena, se dijo claramente que el juicio de imputación de responsabilidad por los



daños derivados de actos violentos de terceros, especialmente por ataques terroristas o incluso armados contra el estamento oficial, no podía agotarse bajo la óptica del daño especial, que por el contrario era necesario observarse desde el subjetivo de falla en el servicio o el objetivo del riesgo excepcional, ya que el principio de solidaridad utilizado para atribuir responsabilidad por daño especial, no constituye un fundamento autónomo de responsabilidad.

Así lo manifestó el máximo tribunal de lo contencioso administrativo:

"18.55. El principio de la responsabilidad patrimonial del Estado constituye una garantía constitucional para los ciudadanos y se suscita cuando se reúnen los elementos requeridos por el artículo 90 de la Constitución - daño e imputación al poder público-, mientras que el principio de solidaridad surge como un mandato de optimización inherente al Estado social de derecho que exige de todas las autoridades públicas y de los asociados la promoción de acciones positivas en favor de quienes experimentan condiciones de desventaja o debilidad manifiesta, por lo cual el Estado debe desarrollar políticas públicas dirigidas a equilibrar los beneficios y cargas de todos los integrantes de la sociedad. No obstante, la solidaridad no se erige, bajo ningún motivo, en fundamento autónomo.

Cuando en los procesos como el que hoy nos atañe se observa la orfandad probatoria debe sugerirse de la forma más respetuosa al Juez de conocimiento no es posible erigir un juicio de imputación por ausencia de relación causa a efecto entre el hecho generador del daño y la conducta predicable de la Policía Nacional, motivo por el cual no es posible configurar la responsabilidad de mi defendida bajo ninguno de los títulos de imputación aceptados por la doctrina y la jurisprudencia contencioso administrativa.

Vistos los argumentos de la demanda, es dable decir que las entidades estatales son responsables por omisión pero no de manera absoluta e incondicional sino relativa, pues están condicionadas a la existencia de determinadas circunstancias como la solicitud expresa de protección o vigilancia, de conformidad con las exigencias y formalidades establecidas en la ley, además, pese a los esfuerzos realizados para garantizar la vida, honra y bienes de los asociados ha sido casi imposible evitar este tipo de acciones terroristas perpetrados por grupos de narcotraficantes de forma sorpresiva e imbatible. Esta circunstancia con elementos de imprevisible e irresistible constituyen una causal excluyente de responsabilidad de caso fortuito o fuerza mayor, o también del hecho de un tercero.

### SOLICITUD RESPETUOSA

De manera respetuosa, solicito ante el despacho de la Honorable Juez, se denieguen en su totalidad las pretensiones de la parte actora y se exonere de responsabilidad a la **NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL**, de conformidad con lo expuesto en el presente memorial y los documentos que obran en el proceso.

### NOTIFICACIONES

**Personales:** Avenida Panamericana 1N-75 Popayán – Comando de Policía Cauca  
**Electrónica:** decau.notificacion@policia.gov.co

Atentamente,

**WALTER HERNAN PATIÑO VELASCO**  
C.C. 10.756.473 de Piendamó  
T.P. No. 272.957 del C.S.de la Judicatura.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
SECRETARIA GENERAL  
UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL CAUCA



SECRETARIA GENERAL  
UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL CAUCA

Señor (a)  
JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL POPAYAN  
E. S. D.

20170034800	20210009600
Demandante	MARISEL SOTO Y OTROS
Demandado	NACION MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL
Medio de control	REPARACION DIRECTA

Coronel **GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ BUSTOS**, mayor de edad, vecino de esta Ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.419.518 de Fresno - Tolima, en mi condición de Comandante de Departamento de Policía Cauca, de conformidad con la Resolución 5600 del 09 de octubre del 2019 y 3200 de fecha 31 de julio de 2009, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, y en virtud de las facultades conferidas a través de la Resolución No 3935 del 29 de septiembre de 2021, de manera respetuosa, manifiesto que por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente al Abogado **WALTER HERNAN PATIÑO VELASCO**, identificado con la cédula de ciudadanía No.10.756.473 de Pasto Nariño y portador de la Tarjeta Profesional No. 272.957 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, quien es funcionario del **MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL** para que de conformidad con la Ley 1437 de 2011, atienda hasta su culminación el proceso citado en la referencia y realice todas las gestiones legales en procura de la defensa de la Policía Nacional.

El apoderado queda facultado para ejercer todas las actuaciones necesarias para la defensa de los intereses de la **NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL**, tales como son contestar la demanda, entablar acción de repetición, realizar llamamiento en garantía, proponer excepciones, recibir, renunciar, conciliar de acuerdo con los parámetros que señale el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como para sustituir y reasumir el presente mandato, sin que pueda decirse en momento alguno que actúan sin poder suficiente.

Sírvase reconocer personería para actuar al apoderado judicial.

Atentamente,

Coronel **GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ BUSTOS**  
Cedula de ciudadanía No 93.419.518 de Fresno - Tolima

Acepto,

**WALTER HERNAN PATIÑO VELASCO**  
C.C. 10.756.473 de Piendamó  
T.P. No. 272.957 del C.S.de la Judicatura.



### CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

El anterior memorial va dirigido al **JUZGADO 8 ADMINISTRATIVOS DEL CAUCA** y es presentado personalmente por su signatario, señor **Coronel GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ BUSTOS**, Quien se identifica con la cedula No 93.419.518 de Fresno - Tolima, Ante la secretaria del juzgado de Instrucción Penal Militar No 183 adscrito al Departamento de Policía Cauca a los 16 días del mes de 11 del año **2021** quien declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya.

SECRETARIO (A)

Juzgado 183 de Instrucción Penal Militar

### CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

El anterior memorial va dirigido al **JUZGADO DECIMO 8 DEL CAUCA** Es presentado personalmente por su signatario, **Doctor WALTER HERNAN PATIÑO VELASCO**, quien se identifica con la cedula No. 10.756.473 de Piendamó y Tarjeta Profesional No. 272.957 del Consejo Superior de la Judicatura, Ante la secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Militar No 183 adscrito al Departamento de Policía Cauca a los 16 días del mes de 11 del año **2021**, quien declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya.

SECRETARIO (A)

Juzgado 183 de Instrucción Penal Militar





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 3935 DE 2021

( 29 SEP 2021 )

Por la cual se traslada a un personal de Oficiales Superiores de la Policía Nacional

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

En ejercicio de la facultad legal que le confiere el artículo 42 numeral 2 literal b) del Decreto Ley 1791 de 2000,

RESUELVE:

**ARTÍCULO 1.** Trasladar a los Oficiales Superiores de la Policía Nacional que se relacionan a continuación, a partir de la comunicación del presente acto administrativo, a las unidades que en cada caso se indica, así:

Coronel PARRADO MORA NELSON DABEY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.824.152, del Departamento de Policía Nariño al Departamento de Policía Valle, como Comandante.

Coronel MARTINEZ BUSTOS GUSTAVO ADOLFO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.419.518, del Departamento de Policía Magdalena Medio al Departamento de Policía Cauca, como Comandante.

Coronel DE LOS REYES VALENCIA JESUS MANUEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.641.971, de la Policía Metropolitana de Santa Marta a la misma unidad, como Comandante.

Coronel SANCHEZ ACOSTA ALEXANDER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.602.820, de la Dirección de Antinarcóticos al Departamento de Policía Magdalena Medio, como Comandante.

Coronel CEPEDA CIFUENTES NESTOR RAUL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.614.742, de la Unidad de Escuadrones Móviles Antidisturbios al Departamento de Policía Tolima, como Comandante.

Coronel REYES CRUZ HILBAR ALFONSO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.695.955, del Departamento de Policía Nariño a la misma unidad, como Comandante.

Coronel BARACALDO LEON WILLIAM, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.747.933, del Departamento de Policía Nariño a la Policía Metropolitana de Ibagué, como Comandante.

**ARTÍCULO 2.** Comunicar por intermedio de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional el presente acto administrativo.

**ARTÍCULO 3.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dada en Bogotá D.C., a los, 29 SEP 2021

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE



## CONTESTACION 2021009600- MARISEL SOTO Y OTROS

WALTER HERNAN PATIO VELASCO <walter.patino6473@correo.policia.gov.co>

Lun 29/11/2021 11:31 AM

Para: Juzgado 08 Administrativo - Cauca - Popayan <j08admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>; fernandoyepes@yepesgomezabogados.com <fernandoyepes@yepesgomezabogados.com>; henry-bryon@outloo.es <henry-bryon@outloo.es>; GABRIEL ESCOBAR CORAL <gabriel.escobar1336@correo.policia.gov.co>

 3 archivos adjuntos (817 KB)

CONTESTACION- 2021009600- MARISEL SOTO - ATENTADO TERRORISTA.pdf; PODER.pdf; RESOLUCIÓN 3935 DE 2021.pdf;

Teniendo en cuenta las normas de bioseguridad que adoptó la Rama Judicial con ocasión de la pandemia por COVID 19 y en especial lo relacionado a la distancia física que deben guardar las personas que ingresen a las sedes judiciales y al considerar que la forma como se encuentran dispuestos los puestos de trabajo en las salas de audiencia, no permiten el distanciamiento físico entre los sujetos procesales, mediante aviso a la comunidad publicado el día 25 de junio de 2020, se estableció:

*"... 5. Las peticiones, recursos, solicitud de copias simples y primeras copias, poderes, sustituciones, asignación de citas para atención presencial y demás memoriales, que eleven los usuarios del servicio, se recibirán exclusivamente a través de los correos electrónicos institucionales detallados en el numeral primero."*

...

*"... 8. La atención presencial de los usuarios en la sede de los Juzgados se sujetará, en los términos del parágrafo 2 del artículo 3º del Acuerdo CSDJ-11567 de 2020, a la asignación de cita previa solicitada al correo institucional o a la línea telefónica, y se "RESTRINGIRÁ A LO EstrictAMENTE NECESARIO", sin que en ningún caso se puedan recibir memoriales o peticiones."*

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito remitir por medio electrónico la actuación procesal de la referencia, y dada la cantidad de procesos en los cuales es demandada la Policía Nacional en la jurisdicción del Cauca, de manera atenta solicitando se observe lo dispuesto en el artículo 205 del CAPACA, en consecuencia se acuse el recibo del presente memorial, a saber:

*"ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. Además de los casos contemplados en los artículos anteriores, se podrán notificar las providencias a través de medios electrónicos, a quien haya aceptado expresamente este medio de notificación."*

*En este caso, la providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario a la dirección electrónica registrada y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente..."*

Así mismo se dé cumplimiento estricto e inmediato cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4. Del aviso a la comunidad, el cual indica:

*"El estado o trámite de los procesos, para efectos de su consulta virtual, se continuará actualizando en la página web de la Rama Judicial, a través de la plataforma de información SIGLO XXI."*

Lo anterior con el fin de garantizar los principios de publicidad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, contradicción y doble instancia.



Subintendente  
**WALTER PATIÑO VELASCO**  
Teléfonos: 3186249595  
[www.policia.gov.co/](http://www.policia.gov.co/)  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
**POLICÍA NACIONAL**



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
SECRETARIA GENERAL  
UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL CAUCA



SECRETARIA GENERAL  
UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL CAUCA

Señor (a)  
JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL POPAYAN  
E. S. D.

20170034800	20210009600
Demandante	MARISEL SOTO Y OTROS
Demandado	NACION MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL
Medio de control	REPARACION DIRECTA

Coronel **GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ BUSTOS**, mayor de edad, vecino de esta Ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.419.518 de Fresno - Tolima, en mi condición de Comandante de Departamento de Policía Cauca, de conformidad con la Resolución 5600 del 09 de octubre del 2019 y 3200 de fecha 31 de julio de 2009, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, y en virtud de las facultades conferidas a través de la Resolución No 3935 del 29 de septiembre de 2021, de manera respetuosa, manifiesto que por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente al Abogado **WALTER HERNAN PATIÑO VELASCO**, identificado con la cédula de ciudadanía No.10.756.473 de Pasto Nariño y portador de la Tarjeta Profesional No. 272.957 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, quien es funcionario del **MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL** para que de conformidad con la Ley 1437 de 2011, atienda hasta su culminación el proceso citado en la referencia y realice todas las gestiones legales en procura de la defensa de la Policía Nacional.

El apoderado queda facultado para ejercer todas las actuaciones necesarias para la defensa de los intereses de la **NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL**, tales como son contestar la demanda, entablar acción de repetición, realizar llamamiento en garantía, proponer excepciones, recibir, renunciar, conciliar de acuerdo con los parámetros que señale el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como para sustituir y reasumir el presente mandato, sin que pueda decirse en momento alguno que actúan sin poder suficiente.

Sírvase reconocer personería para actuar al apoderado judicial.

Atentamente,

Coronel **GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ BUSTOS**  
Cedula de ciudadanía No 93.419.518 de Fresno - Tolima

Acepto,

**WALTER HERNAN PATIÑO VELASCO**  
C.C. 10.756.473 de Piendamó  
T.P. No. 272.957 del C.S.de la Judicatura.



### CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

El anterior memorial va dirigido al **JUZGADO 8 ADMINISTRATIVOS DEL CAUCA** y es presentado personalmente por su signatario, señor **Coronel GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ BUSTOS**, Quien se identifica con la cedula No 93.419.518 de Fresno - Tolima, Ante la secretaria del juzgado de Instrucción Penal Militar No 183 adscrito al Departamento de Policía Cauca a los 16 días del mes de 11 del año **2021** quien declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya.

SECRETARIO (A)  
Juzgado 183 de Instrucción Penal Militar

### CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

El anterior memorial va dirigido al **JUZGADO DECIMO 8 DEL CAUCA** Es presentado personalmente por su signatario, **Doctor WALTER HERNAN PATIÑO VELASCO**, quien se identifica con la cedula No. 10.756.473 de Piendamó y Tarjeta Profesional No. 272.957 del Consejo Superior de la Judicatura, Ante la secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Militar No 183 adscrito al Departamento de Policía Cauca a los 16 días del mes de 11 del año **2021**, quien declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya.

SECRETARIO (A)  
Juzgado 183 de Instrucción Penal Militar





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 3935 DE 2021

( 29 SEP 2021 )

Por la cual se traslada a un personal de Oficiales Superiores de la Policía Nacional

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

En ejercicio de la facultad legal que le confiere el artículo 42 numeral 2 literal b) del Decreto Ley 1791 de 2000,

RESUELVE:

**ARTÍCULO 1.** Trasladar a los Oficiales Superiores de la Policía Nacional que se relacionan a continuación, a partir de la comunicación del presente acto administrativo, a las unidades que en cada caso se indica, así:

Coronel PARRADO MORA NELSON DABEY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.824.152, del Departamento de Policía Nariño al Departamento de Policía Valle, como Comandante.

Coronel MARTINEZ BUSTOS GUSTAVO ADOLFO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.419.518, del Departamento de Policía Magdalena Medio al Departamento de Policía Cauca, como Comandante.

Coronel DE LOS REYES VALENCIA JESUS MANUEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.641.971, de la Policía Metropolitana de Santa Marta a la misma unidad, como Comandante.

Coronel SANCHEZ ACOSTA ALEXANDER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.602.820, de la Dirección de Antinarcóticos al Departamento de Policía Magdalena Medio, como Comandante.

Coronel CEPEDA CIFUENTES NESTOR RAUL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.614.742, de la Unidad de Escuadrones Móviles Antidisturbios al Departamento de Policía Tolima, como Comandante.

Coronel REYES CRUZ HILBAR ALFONSO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.695.955, del Departamento de Policía Nariño a la misma unidad, como Comandante.

Coronel BARACALDO LEON WILLIAM, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.747.933, del Departamento de Policía Nariño a la Policía Metropolitana de Ibagué, como Comandante.

**ARTÍCULO 2.** Comunicar por intermedio de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional el presente acto administrativo.

**ARTÍCULO 3.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dada en Bogotá D.C., a los, 29 SEP 2021

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE